



Miguel García Guindo
Profesor Universidad de Jaén

INSURGENCIAS: LA COMPETENCIA POR LOS RECURSOS COMO VARIABLE EXPLICATIVA

A lo largo de los últimos años, hemos asistido a una proliferación de artículos científicos en los que se defiende una postura explicativa de la naturaleza y violencia ejercida por movimientos insurgentes, centrada en factores de índole económica. Lo que se pretende en estas líneas es exponer un enfoque distinto; no inspirado tanto en la codicia y la depredación de bienes públicos y privados derivados del conflicto, sino en el resultado de una elección racional que acuerda un grupo insurgente cuando ve amenazada su supervivencia y pierde su situación de monopolio sobre la población de la que pretende obtener apoyos para su causa.

Insurgencia, violencia política, conflictos armados, recursos naturales, Afganistán, Kandahar, Sudán, Sudán del Sur, SPLM.

In recent years, we have been witness to the proliferation of scientific articles that uphold an explaining position of the nature and violence exerted by insurgencies no longer focused on political or social factors, but rather, in those other economic. The aim in these lines is to expose a different approach none inspired by the greed and the predation of public and private property resulting from the conflict. Conversely, we understand that this is the result of a rational choice that an insurgent group agrees when its survival is threatened and it loses its monopoly on the population that sought support for his cause.

Insurgency, political violence, armed conflicts, natural resources, Afghanistan, Kandahar, Sudan, South Sudan, SPLM.

INSURGENCIAS: LA COMPETENCIA POR LOS RECURSOS COMO VARIABLE EXPLICATIVA

Introducción

En los últimos años, en el campo de los estudios sobre movimientos insurgentes, hemos sido testigos de cómo un creciente número de científicos defienden una postura explicativa de la naturaleza y de la violencia ejercida por estos grupos; no tan centrada en los factores políticos o sociales que, al fin y al cabo, son los que han dominado tradicionalmente los análisis relacionados con las diversas insurgencias, sino, más bien, en aquellos otros de índole económica.

Éste es el caso paradigmático de la investigación que lleva a cabo Paul Collier (2000 y 2003) sobre la tendencia y estructura global de las guerras civiles, desde 1965 hasta mediados de la década de los noventa. El autor concluye que son cuestiones de carácter crematístico las que motivan el origen y alientan la existencia de este tipo de conflictos, en los que proliferan los movimientos insurgentes. Como señala el autor, serán los beneficios económicos (oportunismo que genera una economía centrada en el corto plazo, el incremento de la criminalidad, la alteración de las pautas habituales del mercado o las situaciones de monopolio), guiados por la codicia de los actores, los que se impongan a aquellos factores que pudieran contribuir a reclamaciones, agravios u objeciones colectivas y tuvieran su origen en fracturas de tipo étnico, religioso, o como consecuencia de la aplicación de políticas represivas por parte de la autoridad en el poder.

Lo que se pretende en estas líneas es exponer un enfoque diferenciado de aquellos estudios (nos referimos en particular a los de Collier, Hoeffler y Sambanis) que optan por explicar la violencia ejercida por los movimientos rebeldes como un producto fruto de la depredación de los actores que intervienen en el conflicto. Para ello partiremos de una concepción distinta, en la que la violencia es, en ocasiones, el resultado de una elección racional que realiza un grupo insurgente cuando ve amenazada su supervivencia.

Recursos y Competencias

El tipo de relación que mantiene una facción o grupo insurgente con la población de la que pretende obtener apoyos (ya sea mediante financiación, reclutando soldados para el combate o como fuente de información) está poderosamente condicionado por la posible existencia de grupos rivales que compiten por la captación de esos mismos recursos. En contextos en los que no existe rivalidad por la “extracción” de recursos resulta más sencillo consolidarse, así como ejercer un control centralizado de la comunidad. Nos referimos a aquellos en los que no resulta necesario recurrir a medidas coercitivas, ni tampoco el ejercicio de la violencia sobre la población civil¹.

Siguiendo el mismo razonamiento, sucederá exactamente lo contrario en aquellos casos en los que exista competencia efectiva -o sensación de amenaza- por la pérdida del control de esos recursos, ya sea entre facciones insurgentes o con la intervención del propio gobierno. En estos escenarios, los niveles de violencia serán, con toda probabilidad, mayores. Se trata de un proceso darwiniano en el que no tiene cabida la figura del *primus inter pares*, en el que las relaciones de poder son a su vez entendidas como un juego de suma cero.

Llegados a este punto, nos preguntamos por qué existe una mayor libertad de actuación para aquellos grupos insurgentes que operan en las circunstancias señaladas. Tratando de encontrar una respuesta a esa interrogante, partimos de la base de una serie de limitaciones específicas que condicionan la relación entre la insurgencia y aquella población de la que anhela nutrirse.

La escasez de recursos, en muchos de los escenarios que comportan un enfrentamiento contra insurgencias, genera incentivos para llegar a acuerdos contractuales con los habitantes de ese territorio. Estos incluyen la provisión de determinados servicios públicos como, por ejemplo, la seguridad, la educación o la asistencia médica. Si los rebeldes fracasan a la hora de proporcionar de forma satisfactoria estos servicios, es probable que la población tienda a huir de la insurgencia. Si, por el contrario, son capaces de llevar a cabo una exitosa gestión en la provisión y garantía de dichos servicios básicos, se establece un *quid pro quo* donde todos ganan. Al mismo tiempo, esta situación de monopolio le permite a la insurgencia disponer de una fuente constante de suministros.

1 Aunque no sea el objeto de debate de este artículo, es importante hacer en este punto dos precisiones. En primer lugar, estas relaciones contractuales se basan principalmente en la prestación de asistencia social por parte de la insurgencia hacia la población de la que pretende obtener el apoyo. Sin embargo esta provisión de servicios de distinta naturaleza como programas educativos, sanidad, empleo, atención a las víctimas del conflicto y que tienen como objetivo ofrecer una cara amable de la insurgencia así como la creación de redes clientelares, parte de una premisa fundamental: la existencia de zonas liberadas que permitan. En segundo lugar, cuando hablamos del ejercicio de la violencia, nos referimos a la práctica de herramientas auxiliares. Instrumentos de los que se nutre la insurgencia como pudieran ser el terrorismo, como consecuencia de la asimetría de fuerzas.

La competencia, sin embargo, cambia la relación que establecen los insurgentes con la población local, afectando particularmente a la toma de decisiones que se lleva a cabo dentro de las distintas facciones que conforman el movimiento, mostrándose más propensas a la coacción, precisamente como consecuencia de la rivalidad existente. Bajo estas circunstancias, los distintos grupos se pueden ver forzados a modificar la lógica de las prioridades en el corto plazo, con el fin de garantizar su propia supervivencia. A las dificultades de abastecimiento, derivadas de una posible escasez de recursos, de los condicionantes que impone el entorno o de la propia situación de ilegalidad de la insurgencia, habría que sumarle ahora el agravante que se deriva de la presencia de grupos rivales o competidores.

La cuestión preeminente va a ser entonces asegurar la supervivencia del grupo, circunstancia que va a condicionar el horizonte temporal de la insurgencia. Las relaciones contractuales, a las que antes nos referíamos, requieren de una inversión a largo plazo. Sin embargo, la captación o monopolización de recursos, que nos parece fundamental para el posterior afianzamiento de toda facción o grupo insurgente, requiere de la aplicación de métodos que lleven a los más eficientes -al menos a corto plazo- a llevar a cabo un uso prioritario de la fuerza.

Esta competencia produce un cierto estrabismo a la hora de diferenciar entre aquellos objetivos que pudiéramos considerar intermedios, que a su vez inciden en el proceso de consolidación, con el objetivo último que persigue toda insurgencia, como es el derrocamiento de la autoridad política en el poder o el establecimiento de un orden político alternativo.

Por su parte, el Estado juega un interesante y particular rol en la dinámica que se genera entre la insurgencia y la población, en tanto puede hacer las veces de rival directo del primero, ya sea a través de la puesta en marcha de acciones coercitivas o implantando reformas encaminadas a gestionar los conflictos que han dado origen a la fractura social o política. En cualquiera de los casos, el objetivo va a ser siempre el mismo: aislar a la insurgencia de la población.

Cuando esto último ocurre (nos referimos al hecho de introducir cambios que supongan una amenaza a la causa que enarbola la insurgencia, y que sirve de base de ensanchamiento social del propio grupo), es probable que se adopten actitudes que cristalicen en un incremento del nivel de violencia ejercido contra la población. La autoridad en el poder pasa, de este modo, a transformarse en un competidor más por captar los recursos y la obediencia de los ciudadanos, bien concediendo distintas clases de derechos a grupos o fomentando los sentimientos de autonomía y de pertenencia de aquellas comunidades sobre las que pretende influir y/o tiene presencia la insurgencia.

Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán: un arquetipo

Un caso particular, que nos permite ejemplificar lo dicho con anterioridad, es el del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, en sus siglas en inglés). Es cierto que determinados factores, como el fin del esquema bipolar y la retirada de apoyo externo (en particular el que prestaba el Gobierno de Etiopía), incidieron de manera muy particular en el cambio de actitud y en el grado de violencia ejercido por esta facción insurgente hacia la población sudanesa². Pero el elemento que actuó de palanca, permitiendo al mismo tiempo la metamorfosis de este movimiento, fue la condición monopolista en la extracción de recursos, durante finales de la década de 1990 y a principios del siglo XXI, periodo durante el que se produjo a su vez una drástica reducción en la cantidad de facciones rivales con las que el SPLM mantenía un enfrentamiento abierto.

El SPLM se crea tras la escisión de un grupo de antiguos miembros del Ejército sudanés, que se unieron para luchar contra el Gobierno de Jartum. Desde sus orígenes, estuvo plagado de luchas internas. La gran mayoría de ellas, originadas por viejas rivalidades y disputas en torno al liderazgo de los rebeldes; y por la decisión de John Garang, quien entonces encabezaba el SPLM, de proclamar como objetivo prioritario de la insurgencia la formación de un nuevo Sudán unido, antes que optar por la autodeterminación como su principal reivindicación³.

Podemos dividir la historia de este movimiento en tres periodos, que nos permiten trazar con mayor nitidez el cambio de comportamiento que esta facción insurgente experimentó en su relación con la población sursudanesa⁴:

1. El primero de ellos comprende desde su aparición en escena, en 1983, hasta el año 1993. Este decenio se caracteriza por la intensa rivalidad que surgió entre

2 La fuerza de este apoyo (nos referimos en particular al del patronazgo estatal) se suele materializar en forma de refugio, campos de entrenamiento, asesoramiento militar, armamento; así como en la provisión de recursos tangibles, que no obedecen necesariamente a un fin exclusivamente militar. Este es el caso de la financiación, que puede cubrir las demandas, vinculadas tanto a los suministros para el combate como la de aquellos otros destinados al mantenimiento del aparato político o la atención a las necesidades más básicas de la "tropa". Circunstancia que adquiere especial significado cuando nos encontramos ante conflictos que comportan una estrategia de guerra prolongada, a fin de que no decaiga la moral de quienes militan en la insurgencia y evitar así que se produzcan desertiones entre sus filas).

3 Garang era consciente de que poner en marcha una agenda separatista, que fue en su momento la que alentó a los primeros rebeldes anyanya durante el trascurso de la primera guerra civil sudanesa y que enfrentó al norte con el sur de Sudán, era un error. Sabía que Mengistu, líder del Consejo Administrativo Militar Provisional en Etiopía (conocido también como el Derg), no prestaría su apoyo a un grupo armado que perseguía la autodeterminación cuando él a su vez se enfrentaba a un problema similar en su propio territorio.

4 Metelits, Claire. *Inside Insurgency*, New York, New York University Press, 2008. pp. 31-79

las distintas corrientes. Una situación que unida a uno contexto de bienes escasos, no garantizaba el flujo necesario de suministros y recursos necesarios para el SPLM. Coincide también esta etapa con unas milicias (las del SPLM) mal organizadas y descompuestas⁵, con lo que el acceso a los mismos resultaba en el mejor de los escenarios bastante incierto. Al mismo tiempo, el comportamiento que mostró el grupo hacia los no combatientes fue extremadamente violento, registrándose hechos que pueden ser calificados de atroces: entre estos, ejecuciones sumarias, violaciones sistemáticas de mujeres y niñas en varios poblados, secuestro de menores para usarlos como soldados, etc.

2. Durante el segundo periodo, que transcurrió entre 1994 y el año 2000, decreció la rivalidad que mantenían entre sí las distintas facciones. Muchas depusieron su actitud levantisca y, con el paso del tiempo, terminarían integrándose en el SPLM, en particular los que se habían agrupado en la corriente denominada *Sudan People's Democratic Forces* (SPDF, en sus siglas en inglés). Como consecuencia de la posición de debilidad a la que se vio relegada esta facción insurgente, Riek Machar (líder del SPDF) decidió poner fin a la cooperación con Jartum, reduciendo de forma considerable las luchas y disputas que tenían lugar entre los sublevados, en lo que hoy es territorio de Sudán del sur. Por consiguiente, se allanó el camino para la consolidación definitiva del SPLM como el movimiento hegemónico dentro de lo que, con el transcurso de los años, se convertiría en un nuevo Estado en el continente africano.
3. Otro elemento que contribuyó en gran medida al proceso que describimos fue la gestión de los recursos procedentes de la formación del *New Sudan Council of Churches* (NSCC). Creado en enero de 1990, tenía como objetivo aliviar el sufrimiento y las penurias que asolaban a la población de las áreas que habían quedado bajo el control del SPLM. La independencia y credibilidad de la entonces nueva institución fueron finalmente aceptadas por varias organizaciones internacionales, a pesar de los lazos que la vinculaban al SPLM. Por añadidura, el apoyo que recibieron de la Comunidad Internacional, y en particular de distintas ONG extranjeras, ayudó al SPLM a obtener un control adicional (estas actividades estaban subordinadas a la voluntad y propósitos de esta facción insurgente). Mediante su financiación, se planificaron y emprendieron diversas actividades, como la provisión de servicios esenciales a la población local o campañas para atraer el capital de nuevos donantes.

En 1994 las partes en litigio firmaron un acuerdo que otorgaba carácter oficial a los principios que se habían aprobado mediante la *Operación Lifeline Susan* (OLS) en 1989. Se trataba de un consorcio de agencias de Naciones Unidas (constituido fundamentalmente por UNICEF y el Programa Mundial de

⁵ No había transcurrido un mes desde su gestación, cuando un grupo de veteranos, que conformaban la primera rebelión de “sureños” por la independencia y que apoyaban la idea de la secesión del sur, decidieron abandonar el movimiento.

Alimentos) que, junto a 39 ONG de distinta procedencia, operaban en el Sur de Sudán para prestar asistencia humanitaria en las regiones más devastadas por la guerra. Al mismo tiempo, trataban de paliar los efectos de la sequía que mantenía al país sometido a la inanición. Mientras que el régimen del norte del Frente Islámico Nacional (NIF, en sus siglas en inglés) mantenía una actitud abiertamente hostil hacia estas operaciones de emergencia, la OLS, así como los donantes internacionales, alentaban al SPLM a que llevara a cabo una reclamación explícita de su derecho a administrar las zonas liberadas en el sur, entendiendo que una región que disfrutaba de amplia autonomía haría al aparato humanitario menos dependiente de los designios de Jartum, a la par que más eficaz.

Esta relación entre el SPLM y los donantes externos generó en la población del sur una percepción más positiva de la facción liderada por Garang, que se tradujo en un incremento de su legitimidad, tanto a nivel doméstico como ante la Comunidad Internacional. El SPLM logró de esta forma erigirse como el único extractor de recursos y la única fuerza legítima en los territorios del sur, consolidando definitivamente su posición en enero de 2001 tras la firma de un “Memorando de Entendimiento”. En aquel documento, esta facción insurgente se convertía oficialmente en la única autoridad dotada de capacidad para establecer diálogo y negociaciones con las organizaciones de ayuda humanitaria que operaban en aquellas áreas donde ejercía su control. A partir de ese momento, las agencias y organizaciones que quisieran llevar a cabo operaciones en ese territorio tendrían que acogerse a los términos y condiciones exigidos por el SPLM⁶.

4. El tercer periodo, de 2001 a 2005, estuvo dominado por el proceso de negociación de paz. El SPLM disfrutaba entonces de un monopolio sin restricciones sobre los recursos locales, a los que se sumaba la ayuda proveniente del exterior. Durante este tiempo, el trato hacia la población civil comenzó a establecerse según los principios que rigen una relación de carácter meramente contractual. No era necesario hacer frente a ninguna clase de competencia por captar recursos, pudiendo así atender a los requerimientos de los donantes externos que, por

6 Hasta el punto de darles un ultimátum a las 39 agencias que actuaban en la zona, recordándoles que habían firmado el borrador del Memorando; y que, en caso de que no cumplieran con las exigencias del mismo, se verían forzadas a abandonar el territorio. Entre otras cosas, este Memorando señalaba que el SPLM ejercería el control sobre la distribución de la asistencia humanitaria y requería que las ONG trabajaran en sintonía con los objetivos del *Sudan Relief and Rehabilitation Association* (SRRA), agencia humanitaria del SPLM, antes que con los principios que rigen la ayuda humanitaria. El SRRA se crea en 1985, con el mandato de coordinar y facilitar los programas de asistencia en el sur de Sudán. Su sede central está ubicada en New Cush, y cuenta con otras tantas oficinas de enlace en Nairobi, Kampala, Addis Abeba y Loki. En la actualidad, el SRRA coordina y facilita las actividades humanitarias en 23 condados, alcanzando una amplia área de influencia, con una extensión cercana a los 400.000 kilómetros cuadrados y una población estimada en 6,5 millones. Disponible en: UN Department of Economic and Social Affairs: <http://www.un.org/esa/desa>

su parte, exigían evidencias palpables de avances democráticos en la administración del territorio. La intervención de una fuerza internacional de paz hizo posible que se firmara, el 9 de enero de 2005, el *Acuerdo Comprensivo de Paz (CPA por sus siglas en inglés)*. Garang, por su parte, se convirtió en vicepresidente del Gobierno de Jartum, mientras que Ahmad al-Bashir se mantuvo al mando. Finalmente, la decisión de autodeterminación fue aprobada por plebiscito, en 2011.

A modo de reflexiones finales

En resumen, la violencia insurgente que se ejerce contra los ciudadanos es una respuesta a la amenaza que, desde la perspectiva rebelde, se cierne sobre la supervivencia de sus grupos armados. Así, el miedo a sucumbir actúa como un poderoso elemento de motivación para seguir cometiendo actos violentos. En situaciones de mayor competencia, en cambio, los insurgentes suelen refugiarse propiciando un clima de intensificación de la violencia, con el único propósito de retener su privilegiada posición en la gestión monopolizada de los recursos.

La aceptación de las teorías que se centran en los recursos, que establecen nexos entre su captación—utilización y el nivel de coerción desplegado por muchos grupos armados, implica reconocer que son éstos recursos los que dirigen el comportamiento de los actores. Dicho de otro modo: allá donde la disponibilidad se presenta elevada, podemos preguntarnos si hay también motivos suficientes para que la insurgencia establezca una relación contractual con la población.

Con ello, queremos plantear que las insurgencias cambian estratégicamente sus horizontes temporales (desde el corto plazo hasta uno más alejado en el tiempo y viceversa) independientemente de la dificultad o facilidad que tienen a la hora de reclamar esos recursos como propios. Sin embargo, como hemos tratado de poner de manifiesto a lo largo de estas páginas, en algunos casos las insurgencias puede modificar su perspectiva, en función de un criterio fundamental: si cuentan o no con un espacio político para mantener el monopolio que ejercen con relativa facilidad.

Ha alcanzado cierto predicamento una visión de las nuevas guerras en la que se enfatiza el protagonismo de individuos carentes de cualquier justificación ideológica en el desarrollo de los conflictos contemporáneos. A menudo, se resalta la presencia de estos milicianos en función de los vínculos que mantienen con las redes del crimen organizado a escala internacional. Aunque ese análisis puede resultar de utilidad para explicar algunas de las conductas violentas que han tenido a la población civil como objetivo, no resulta tan pertinente sin embargo cuando se analizan determinados acontecimientos que han protagonizado estos colectivos.

Como hemos expuesto, el comportamiento coercitivo en que incurrió el SPLM contra la población del sur de Sudán, durante las décadas de 1980 y 1990, no guarda

relación alguna con la casi total inexistencia de recursos a su disposición. Tampoco se advierte en este caso una vinculación significativa con las redes del crimen organizado, ni la práctica de actividades ilícitas, como el narcotráfico o el contrabando. No obstante, en el momento en que comenzó a resentirse la competitividad por los recursos, y empezaron a llegar fondos procedentes de donantes externos, la interacción de la población con el movimiento adquirió matices característicos de las relaciones contractuales. Sin embargo, esta evidencia va en contra de los argumentos concernientes a la abundancia de recursos y a la codicia de los actores para apropiárselos. Apelan estos a que, en tiempos y en escenarios de bonanza, la violencia contra los no combatientes resulta más probable.

Esta circunstancia ha llevado a que las teorías económicas neoclásicas, centradas en la maximización de los beneficios (económicos) como principal variable explicativa de las dinámicas de los conflictos, sea fuertemente criticada por otras corrientes de investigación. Estas últimas ponen mayor énfasis en el carácter reduccionista de la aplicación empírica atribuible a la lógica neoclásica, como máxima representante de la propuesta conductual que guía al *Homo economicus*, así como en su tradicional torpeza a la hora de administrar una inevitable necesidad de sortear y pugnar con lo “social”⁷.

La disponibilidad de recursos, per se, no es un elemento del que dependa la conformación de grupos rebeldes. Sin embargo, la actuación de los distintos gobiernos; la existencia de un sistema corrupto en casi todos los ámbitos; una desigual distribución de los beneficios que reporta a un país la actividad económica que genera; la ilegítima patrimonialización de los recursos públicos; o la exclusión de grupos o minorías que propician desigualdades horizontales son, a fin de cuentas, elementos que condicionan en gran medida el origen y devenir de un conflicto, así como la gestación y posterior consolidación de grupos insurgentes. Dicho de otro modo, este tipo de explicaciones nos ofrecen una fotografía bastante incompleta de un conflicto determinado, en cuanto niegan la posibilidad de que el Estado, o cualquier autoridad que ejerza un poder de facto, se constituya en el factor que origina y perpetúa el conflicto, centrando la atención del análisis tan sólo y exclusivamente en la existencia de movimientos insurgentes. Una carencia analítica que, a su vez, implica negar la posible existencia de elites represivas y corruptas que, en muchos casos, pretenden beneficiarse de la guerra a expensas de la población civil⁸.

Resulta a su vez evidente el grave peligro que se corre al inferir motivaciones individuales de correlaciones estadísticas. El hecho de que los participantes se sientan atraídos por los beneficios que reporta el conflicto no puede ser utilizado como un

7 Cramer, Christopher. “Homo Economicus Goes to War: Methodological Individualism, Rational Choice and the Political Economy of War”, *World Development*, Vol. 30, N° 11, 2002. pp. 18-45

8 Ballentine Karen y Heiko Nitzschke. “Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed Conflict”, *International Peace Academy*, 2003. Disponible en: http://www.worldpolicy.org/sites/default/files/imported/projects/arms/study/bako5_1.pdf. Con acceso en agosto de 2012

argumento central sobre el que edificar una teoría explicativa del origen último de la insurgencia. Mientras algunos condicionan su participación a la obtención de beneficios particulares, otros se ven involucrados simplemente por cuestiones de pura supervivencia o están impelidos a cooperar bajo prácticas coercitivas.

En un estudio llevado a cabo en el año 2007, en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, el 80 por ciento de los entrevistados señalaron esta cuestión como la principal razón que les llevó a tomar la decisión de unirse a las filas de los rebeldes. La situación de extrema pobreza, a la que se añade la fuerte presión que acarrea la necesidad de contar con unos ingresos estables para alimentar a unas familias habitualmente extensas y la práctica inexistencia de un mercado de trabajo, son algunos de los factores que empujaron a muchos afganos a adoptar una posición más favorable a la insurgencia⁹.

Independientemente de lo dicho con anterioridad, las motivaciones individuales pueden variar a lo largo del tiempo, conforme evoluciona el desarrollo del conflicto. Al igual que ha ocurrido en un sinnúmero de ocasiones, las disputas motivadas inicialmente por aspectos sociales, políticos o culturales, se han visto complementadas -y en cierta forma superadas- por motivos de origen meramente pecuniario. En este sentido, los casos más representativos son las guerrillas que surgieron en Colombia y Angola. Determinar estas motivaciones, y el dónde o el cuándo, se trasladan a un escenario de conflicto que requiere, en cualquier caso, de una categorización previa más cuidadosa y de una posterior validación empírica.

De manera adicional, aunque en la conflictividad actual insurgencia y criminalidad se solapan en muchas ocasiones, no puede afirmarse que pertenezcan a la misma categoría. Mientras las organizaciones criminales emplean sistemáticamente la violencia con el único propósito de obtener un rápido y cuantioso beneficio económico, existe un acuerdo entre los principales expertos en la materia en que los grupos rebeldes supeditan su participación en actividades económicas a la consecución de los objetivos políticos que esgrimen como justificación de su existencia.

Es cierto que si establecemos una tipología de las insurgencias, nos encontramos con una categoría que no se ajusta con tanta exactitud a los cánones clásicos, puesto que su razón de ser se explica por la intención que manifiesta de socavar los cimientos de la autoridad estatal, para conducir al país a una situación de Estado fallido (total o parcialmente). Mucho antes -como resulta obvio- que hacerse con el control directo del gobierno, o de crear un nuevo Estado¹⁰.

9 Senlis Council. Recommendations for US policy in Afghanistan: security recommendations, 2008. P 37. Disponible en http://www.icosgroup.net/static/reports/us_policy_recommendations.pdf. Con acceso en agosto de 2012

10 Consúltase a este respecto Jordán, Javier. *Delimitación teórica de la insurgencia: concepto, fines y medios*, en Jordán, J., Pozo, P. y Baqués, J. (eds.), *Actores no estatales y seguridad internacional*, Madrid, Plaza y Valdés, 2011. P. 122

Sin embargo, la mayoría de las definiciones aportadas, mediante las que se trata de delimitar el concepto de insurgencia con otros asociados, con los que guardan ciertas similitudes, coinciden en destacar el objetivo político último como elemento diferenciador. Este es el caso de Daniel Byman quien¹¹, sobre la base de la definición elaborada en la década de 1980 por la Agencia Central de Inteligencia americana¹², insiste en resaltar una serie de aspectos relevantes sobre la naturaleza de las insurgencias. En particular, y en lo que concierne a los grupos puramente criminales, señala el hecho de que sus objetivos no estén ligados al control territorial o a otros específicamente políticos.

En este sentido, las insurgencias pueden mantener estrechos vínculos con las redes responsables del tráfico de drogas, o con organizaciones ilegales de cualquier otro tipo. Sin embargo, no es el objetivo prioritario de la organización dedicarse a esa actividad delictiva, sino que, por el contrario, ésta es utilizada como un medio más para alcanzar otro fin, de naturaleza política o ideológica.

Por poner otro ejemplo, Zeeuw define la insurgencia como una *organización no estatal, con claros objetivos políticos, que pugna al mismo tiempo contra el gobierno establecido y por hacerse con el monopolio legítimo del uso de la violencia. Para ello, recurre a la fuerza armada, con el evidente objetivo de reformar, derrocar o separarse de un determinado régimen estatal, o el de establecer y ejercer plenamente el control en un área geográfica específica*¹³. Utilizando esta definición, el autor pone el énfasis, de manera deliberada, en la instrumentalización política del uso de la violencia, a fin de excluir a grupos como bandas criminales, redes transnacionales o comandos terroristas. Es decir, todos aquellos actores que no manifiestan un interés real en crear un gobierno alternativo, ni en controlar una determinada área geográfica dentro de un Estado.

En resumen, y al margen de esta última consideración conceptual, el debate relacionado con la primacía de un elemento sobre otro, como herramienta explicativa, no está aún resuelto. Evidentemente, los factores de naturaleza económica ejercen una influencia considerable en las dinámicas de los conflictos. Sin embargo, también es cierto que no hemos resuelto aún los interrogantes que cuestionan cómo afectan, y en qué medida, su relación con otros aspectos políticos, socioculturales o identitarios. El camino que se debe seguir obliga, en cualquier caso, a partir de la premisa de que los movimientos insurgentes son por regla general multidimensionales, en vez de monocausales, y que, por tanto, requieren de un marco explicativo amplio que supere la dicotomía de lo económico frente a lo político.

11 Byman, Daniel. *Trends in Outside Support for Insurgent Movements*, Santa Monica, RAND Corporation, 2001. Pp. 4-6. Disponible en http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2007/MR1405.pdf. Con acceso en agosto de 2012

12 Disponible en: <http://www.fas.org/irp/cia/product/insurgency.pdf>. Último acceso: octubre de 2012

13 Véase de Zeeuw, J. (ed). *From soldiers to politicians. Transforming rebel movements after civil war*. Bpoulder (Colorado), Lynner Rienner Publishers, 2008.

BIBLIOGRAFÍA:

- BALLENTINE Karen y NITZSCHKE Heiko (2003): "Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed Conflict", *International Peace Academy*, 2003. Disponible en: http://www.worldpolicy.org/sites/default/files/imported/projects/arms/study/bako5_1.pdf. Último acceso: octubre de 2012.
- BYMAN, Daniel (2001): *Trends in Outside Support for Insurgent Movements*, Santa Monica, RAND Corporation.
- COLLIER, Paul (2000): "Rebellion as a Quasi-Criminal Activity", *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 44, N° 6, pp. 839-853.
- y HOFFLER, Anke (2000): "Greed and Grievance in Civil War", *Policy Research Working Paper*, N° 2355, Washington, DC the World Bank.
 - (2003): "The Market for Civil War", *Foreign Policy*, pp. 38-45.
 - (2003): *Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy*, Oxford, Oxford University Press.
 - y SAMBANIS, Nicholas (2005): *Understanding Civil War: Evidence and Analysis, Vol. 1—Africa*, World Bank Publications.
- CRAMER, Christopher (2002): "Homo Economicus Goes to War: Methodological Individualism, Rational Choice and the Political Economy of War", *World Development*, Vol. 30, N° 11, pp. 1845-1864.
- JORDÁN Javier (2011): *Delimitación teórica de la insurgencia: concepto, fines y medios*, en Jordán, J., Pozo, P. y Baqués, J. (eds.), *Actores no estatales y seguridad internacional*, Madrid, Plaza y Valdés.
- METELITS, Claire (2008): *Inside Insurgency*, New York, New York University Press.
- SENLIS (2007): *Countering the insurgency in Afghanistan: losing friends and making enemies*, London, MF Publishing LTD.
- ZEEUW, J. de (ed). *From soldiers to politicians. Transforming rebel movements after civil war*. Boulder (Colorado), Lynner Rienner Publishers, 2008.